

## La nueva "guerra" de Felipe Calderón

MAGDALENA GÓMEZ

**E**l desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la "extinción" de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la "toma de nota" para su dirigencia a fin de profundizar la división de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policíaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.

La decisión calderonista se anunció con la incursión policíaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisiblemente el dicho del secretario de Gobernación: "El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto". Y el mérito de ello es que no "hubo costo humano que lamentar". Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.

La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.

Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que "tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes". Les faltó informarnos a cuánto equivalen los últimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.

Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que "las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico".

Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bacareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la "extinción" decretada la economía se reactivará, "se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos".

Luego vinieron las aclaraciones, no podías, por aquello de las acusaciones manifiestas: "Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia". Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.

Con todas estas razones "fundadas", según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias "con el objeto de hacer mucho más tersa la transición", les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su justa liquidación pongan un *changuero* (perdón, ése era el proyecto foxista) e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.

La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.

Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores están expuestos al veredicto de la "improductividad". ■

SI SE DEJA PASAR

ESTA NUEVA AGRESIÓN

NADIE LO DETENDRÁ

PARA AVANZAR EN

OTROS ESPACIOS

## El SME y la *blitzkrieg*

LUIS HERNÁNDEZ NÚÑERO

**A**cosado por el descontento popular en su contra y la sombra de su ilegitimidad de origen, Felipe Calderón comenzó su sexenio con una *blitzkrieg* y pretende refundarlo con otra. De la ceremonia de toma de posesión al asalto contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la militarización de la política y la guerra relámpago se han convertido en los sellos de su política.

La *blitzkrieg*, o "guerra tan rápida como un relámpago", es una doctrina militar de ataque que combina los bombardeos iniciales con el uso de fuerzas móviles desplazadas a gran velocidad y sorpresa para impedir la defensa coherente del enemigo (Wikipedia.org). Se trata de una guerra de penetración rápida y anulación.

Una variante se efectuó el primero de diciembre de 2006. Recordemos. En esa fecha, el cambio de titular del Poder Ejecutivo, el acto más importante en la liturgia laica de la República, se realizó acelerada, torpe y desordenadamente. En pocos minutos Felipe Calderón llegó a un Congreso de la Unión sitiado por el Estado Mayor Presidencial, rindió protesta como presidente de la República, estuvo a punto de que su antecesor le impusiera la banda, tuvo que ser auxiliado por un militar para que ésta se quedara en su lugar, destituyó a los cadetes empleados para rendirle honores, no pudo dar un mensaje a la nación y puso pies en polvorosa.

Otra modalidad de *blitzkrieg* se echó a caminar para enfrentar a los trabajadores electricistas. Este 10 de octubre, las tropas de la Policía Federal y del Ejército ocuparon "preventivamente" las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) antes de que entrara en vigor el decreto de extinción. Horas después, el gobierno federal decretó la desaparición del organismo y anunció la liquidación de sus trabajadores.

No hay en ello novedad. Han transcurrido casi tres años desde que el actual inquilino de Los Pinos asumió el cargo y lo que sobrepasa de su mandato es su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las fuerzas armadas como telón de fondo. La imagen lo dice todo: el 3 de enero de 2007, en Apaxtzingán, durante su primera actividad pública de ese año, se retrató con uniforme de campaña, una gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional.

Una y otra vez Felipe Calderón ha recurrido al uso de la policía y el Ejército para administrar el país. Ha buscado en el combate al crimen organizado la vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le ha dado las herramientas para gobernar con medidas de excepción. El ataque a los trabajadores electricistas es el último eslabón de esta cadena.

El gobierno federal ha pretendido justificar el asalto al SME responsabilizando al sindicato de la quiebra de la compañía. "Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación de la empresa", dijo el secretario de Gobernación, Fernando

Gómez Mont. La acusación es falsa. Los responsables de las deficiencias de la paraestatal fueron sus directivos. Desde el gobierno federal se hizo todo por descapitalizar a LFC. Parte significativa de los subsidios federales transferidos a la empresa se destinó a subvencionar a consumidores industriales y comerciales. Se impidió a la compañía generar su propia electricidad y, simultáneamente, la Comisión Federal de Electricidad le cobró en la hora pico una tarifa superior a la de uso industrial.

El decreto presidencial es arbitrario e ilegal. Es un nuevo acto autoritario. El Presidente no tiene facultades para extinguir la empresa. Pasó por encima de derechos exclusivos del Congreso de la Unión. El servicio eléctrico no estaba en riesgo ni había amenaza de huelga. Para desaparecer LFC el gobierno debió seguir un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, que no se llevó a cabo.

Desapareciendo al SME el gobierno quiere aniquilar una de las fuerzas sociales capaces de aglutinar el descontento social hacia la crisis económica y la política gubernamental. Busca, además, relanzar la figura presidencial en un momento en que sus bonos están a la baja después de la derrota electoral en los últimos comicios y los continuos descalabros en la guerra contra el narcotráfico. Finalmente, quiere dar vía libre en el negocio de las comunicaciones a la iniciativa privada y, al liquidar LFC, acabar con el contrato colectivo y con la autonomía de un sindicato que le estorba para sus propósitos.

El SME desempeñó un papel central en la realización de los siete Diálogos Nacionales efectuados entre noviembre de 2004 y febrero de este año para promover un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia. La iniciativa fue promovida, sobre todo pero no exclusivamente, por un conjunto de fuerzas sindicales que se ubican por afuera o en abierta contradicción con los dirigentes gremiales del Congreso del Trabajo. En ella participan básicamente representantes de fuerzas políticas y gremiales de centro-izquierda ya organizados.

En meses recientes el movimiento popular se muestra reanimado. Damnificados ambientales, opositores a la construcción de grandes presas, indígenas en lucha por su autonomía, defensores del maíz, afectados por las altas tarifas eléctricas, han constituido coaliciones de resistencia a las que podría sumarse el descontento con las víctimas de la crisis y las políticas económicas del gobierno. Los electricistas tienen mucho que aportar en esta convergencia.

Quiénes aseguran que con la *blitzkrieg* del sábado pasado el SME ha sido derrotado no saben lo que dicen. Quiénes exclaman "tenemos Presidente" deberían pensar dos veces el alcance de su júbilo. Las consecuencias de esta aventura pueden ser muy graves para el país. La última palabra en este conflicto no se ha dicho aún. ■